

26 de mayo de 2011

A: Contratistas y licitadores de contratos para construcción de Estados Unidos en bases militares en Honduras

Nos hemos enterado que su empresa ha expresado interés en un contrato para la construcción de cuarteles para soldados en la Base Aérea de Soto Cano en Honduras o recibió un contrato del Departamento de Defensa para construcción en Soto Cano u otra base militar en Honduras.

Le escribimos para que considere las implicaciones éticas y políticas de tales contratos sobre el pueblo de Honduras, el resto de Centroamérica, y de los Estados Unidos, y le instamos a retirarse de estos contratos y las licitaciones correspondientes.

Varios expertos sostienen que cualquier base militar extranjera viola la Constitución Política de Honduras, tal como fue reconocido por la Oficina General de Contabilidad (GAO - General Accounting Office) del Congreso de Estados Unidos.¹ El artículo 205 de la Constitución requiere la aprobación del Congreso solamente para el tránsito de tropas extranjeras en territorio hondureño.² El uso de chozas “hooches” en vez de cuarteles permanentes en Soto Cano fue un intento de maquillar dicha prohibición al hacer la base estadounidense “temporal”, la cual definitivamente sería cambiado por el próximo contrato.

Aún más, la expansión de la presencia militar de Estados Unidos aumentó durante del gobierno de facto de Roberto Micheletti en 2009. Un alto porcentaje de hondureños consideran al actual gobierno como ilegítimo, porque resultó de las elecciones de noviembre de 2009, que fueron ampliamente boicoteadas. Las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, y la Unión Europea se negaron a enviar observadores a las elecciones, porque no existían las condiciones para llevar a cabo elecciones limpias.³

De hecho, según los informes, la base Soto Cano fue utilizada como escala para el avión que ilegalmente y forzosamente llevó al Presidente Manuel Zelaya fuera de Honduras, un hecho reconocido implícitamente por el Departamento de Estado.⁴ La presencia militar extranjera que su contrato apoyaría viola la soberanía de Honduras y los principios democráticos.

Una de las misiones de la Fuerza de Tarea Conjunta – Bravo basada en Soto Cano es el entrenamiento de las fuerzas armadas de Honduras. No obstante, el ejército hondureño es responsable no solamente por su participación en el golpe de 2009, por lo cual no ha sido llamado a cuentas, sino por la violencia permanente contra los oponentes hondureños del régimen actual.

Human Rights Watch documentó el asesinato de 18 periodistas, oponentes al golpe y defensores de derechos humanos en 2010.⁵ La represión que da lugar a violaciones de derechos humanos es ejecutada por todas fuerzas estatales de seguridad (todas las ramas de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y todas las estructuras de mando, policía municipal, y guardias privados), según un estudio del Instituto Humanista de Cooperación al Desarrollo.⁶ La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos cita “la impunidad generalizada por violaciones a los derechos humanos” y el regreso de escuadrones de la muerte operando en Honduras con el objetivo

de la persecución política.⁷

De cientos de casos de violaciones, “ninguna persona ha sido condenada penalmente por las violaciones de derechos humanos y los abusos de poder ocurridos después del golpe de estado,” declaró Human Rights Watch en diciembre.⁸

El gasto del Departamento de Defensa en contratos en Honduras más del doble de lo que era en 2007,⁹ y la violencia y el narcotráfico en el país también se han multiplicado durante el mismo periodo.¹⁰ Desde el golpe de estado, como resultado de la creciente inseguridad, e incluyendo los asesinatos perpetrados por el Ejército y los policías entrenados por este, Honduras tiene entre las tasas de homicidio más altas del mundo (más de cinco veces la tasa de Irak).¹¹ Independientemente si la presencia militar norteamericana está o no contribuyendo a la violencia, lo cierto es que no la está disminuyendo.

Reconocemos que las fuerzas de Estados Unidos en Honduras se han empleado para responder a las emergencias producidas por los huracanes estacionales. Sin embargo, ninguna obra de buena voluntad cambia la misión fundamental de las fuerzas militares de hacer la guerra y utilizar, o amenazar con el uso de la fuerza violenta. Las respuestas a los desastres naturales como huracanes no requieren una presencia militar de Estados Unidos en Honduras, tal como la GAO ha informado.¹²

Ninguna persona de conciencia busca sacar beneficios con el sufrimiento de los demás, ni causar violencia y destrucción a civiles que abogan pacíficamente por una sociedad mejor. Al apoyar los sectores anti-democráticos, violentos y ricos en la sociedad hondureña, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos está contribuyendo a estos resultados violentos.

Nos imaginamos que usted busca sostenerse a sí mismo y a su familia con este trabajo. Pero le sugerimos que, en este caso, los costos no valen la pena.

Vamos a seguir apoyando la resistencia no-violenta a la violencia, a las violaciones de los derechos humanos, y a la autoridad ilegítima en Honduras, e inclusive a la presencia militar de Estados Unidos en Soto Cano y otros puntos en el país. Le invitamos a responder a esta carta, a la abajo dirección.*

Atentamente,

Líderes e Instituciones Religiosos

General Board of Church & Society, United Methodist Church

Presbyterian Peace Fellowship

Sister Mary Hughes
President, Leadership Conference of Women Religious

Sister Jean Stokan, Director
Sisters of Mercy of the Americas - Justice Team

Rev. Dr. Nicholas T. Novitsky
Episcopal Deacon, Diocese of Western Michigan (solamente para identificación)

Erin Cox
8th Day Center for Justice

* Favor de responder a: HondurasLetter@forusa.org

Fr. Bob Bossie, SCJ
Rev. Dr. Ken Brooker Langston
Director, Disciples Justice Action Network

Sarah Weintraub, Executive Director
Buddhist Peace Fellowship

Rabbi Lynn Gottlieb
Rabbinic elder, Shomer Shalom Network
for Jewish Nonviolence

Rev. John R. Long, DD
Ecumenical Liaison, Presbytery of
Western New York

Rev. Richard Deats
Editor Emeritus, Fellowship magazine

Columbus Peace Fellowship

Chicago Religious Leadership Network on
Latin America
Sisters of St. Francis of Dubuque, Iowa,
Leadership Team

Académicos

Leisy J. Abrego
Assistant Professor, University of
California, Los Angeles

Mark Anderson
Associate Professor, University of
California, Santa Cruz

Arturo Arias
Professor, University of Texas at Austin

César J. Ayala
Professor, Department of Sociology-UCLA

Marc Becker
Professor of Latin American History
Truman State University

Jefferson C. Boyer
Professor of Anthropology, Appalachian
State University

Leah Carroll, Ph.D.
Independent Scholar, Office of
Undergraduate Research, UC Berkeley

Chris Chiappari
St. Olaf College

Noam Chomsky
Massachusetts Institute of Technology

Luis F. Clemente, Ph.D.
Visiting Assistant Professor, Department
of Political Science, Ohio University

Roseann Cohen, Research Associate
Anthropology Department
University of California, Santa Cruz

Linda J. Craft
Professor, Foreign Languages, North Park
University

Jonathan Fox
Professor, University of California, Santa
Cruz

Dana Frank
Professor of History, University of
California, Santa Cruz

Alfonso Gonzales, Ph.D.
Assistant Professor, Department of
Political Science, Lehman College

Greg Grandin
New York University

Doug Hertzler
Associate Director, Washington
Community Scholars' Center

Karen Kampwirth
Professor of Political Science, Knox
College

Catherine Lutz
Chair, Department of Anthropology,
Brown University

Dr. Carlos Muñoz, Jr.
Professor Emeritus, Department of Ethnic
Studies, University of California, Berkeley

Hector Perla Jr.
Assistant Professor, University of
California, Santa Cruz

Suyapa Portillo
Professor, California State University,
Northridge

James Quesada, Ph.D.
Department of Anthropology, San
Francisco State University

Anita Rapone
Professor Emerita, State University of
New York at Plattsburgh

Kelley Ready, Ph.D.
Senior Lecturer, Brandeis University

Carol A. Smith
Emerita Professor of Anthropology,
University of California, Davis

Dr. Steven Topik
Department of History, University of
California Irvine

Mayo C. Toruño, Ph.D.
Professor and Chair of Economics
Department, California State University,
San Bernardino

Sonja Wolf
Post-doctoral Researcher, Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM)

Chris Zepeda
PhD Candidate, Cornell University

Organizaciones

Mark C. Johnson, Ph.D., Executive
Director, **Fellowship of Reconciliation**

Chuck Kaufman, National Coordinator
Alliance for Global Justice

Katherine Hoyt, Ph.D., National
Coordinator, **Nicaragua Network**

James Jordan, National Coordinator
Campaign for Labor Rights

Carleen Pickard, Associate Director
Global Exchange

Dale Sorensen, Director
**Marin Interfaith Task Force on the
Americas**

No Private Armies

**DeKalb Interfaith Network for Peace
and Justice**

Southcom Watch

U.S.-El Salvador Sister Cities

Vic and Barby Ulmer, Co-directors
Our Developing World

Camilo Perez Bustillo
**International Tribunal of Conscience
"Pueblos en Movimiento"** (Law
Professor, UNAM, and lead Attorney for
the TICPM)

Dorinda Moreno
Fuerza Mundial Global, Principal, U.S.
Liaison Secretariat FM/TICPM

Robert Naiman, Policy Director
Just Foreign Policy

Community Action on Latin America
(Madison, Wisconsin)

* Favor de responder a: HondurasLetter@forusa.org

Bruce K. Gagnon, Coordinator
**Global Network Against Weapons &
Nuclear Power in Space**

Nicaragua-U.S. Friendship Office

Amanda Martin, Director
Guatemala Human Rights Commission

Lara Barth, Grassroots Network Liaison
**Network in Solidarity with the People
of Guatemala**

Bette Hoover, Founder/Director
Just Peace Circles Inc

Sharon Hostetler
Executive Director, **Witness for Peace**

Jeanne Mirer, Susan Scott, Azadeh
Shahshahani
Co-Chairs, **National Lawyers Guild
International Committee**

Andrés Thomas Conteris
Americas Program Director
Nonviolence International

Radio La Nueva República

San Jose Peace and Justice Center

School of the Americas Watch

Angela Sanbrano, President
**National Alliance of Latin American
and Caribbean Communities**

Notas

¹ U.S. General Accounting Office, "Honduras: Continuing U.S. Military Presence at Soto Cano Base is Not Critical," GAO-NSIAD-95-39, p. 10.

² Constitución Política de Honduras, Artículo 205, Sección 26, a
http://www.honduras.net/honduras_constitution2.html

³ Congressional Research Service, *Honduran Political Crisis, June 2009-January 2010*, p. 10;
<http://www.un.org/News/Press/docs/2009/sgsm12482.doc.htm>

⁴ Cable, Departamento de Estado, 29 de junio de 2009, de Secretaria de Estado, 09STATE67105, a
<http://www.wikileaks.fi/cable/2009/06/09STATE67105.html>

⁵ Human Rights Watch, *Después del Golpe de Estado: Continúan la violencia, la intimidación y la impunidad en Honduras*, diciembre de 2010, p. 49.

⁶ HIVOS, Instituto Humanista de Cooperación al Desarrollo, "Impunidad en Honduras (Post Golpe de Estado de 28 de junio de 2009)," octubre de 2010, pp. 28-29.

⁷ CIDH, junio de 2010, <http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2010/59-10sp.htm> y CIDH, junio de 2010, "Observaciones preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su visita a Honduras realizada del 15 al 18 de mayo de 2010," para. 65.

⁸ Human Rights Watch, *Después del Golpe de Estado*, p. 20.

⁹ Basado en datos de contratos disponibles en www.usaspending.gov

¹⁰ "American officials say the 2009 coup in Honduras kicked open the door to cartels," the *New York Times* reported in March. See <http://www.nytimes.com/2011/03/24/world/americas/24drugs.html>

¹¹ Ver http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_intentional_homicide_rate and
<http://www.southcom.mil/AppsSC/news.php?storyId=2604>

¹² U.S. General Accounting Office, *op. cit.*